

**Funcionarios en pie de guerra:** clamor contra el Gobierno **P26**

# Funcionarios en pie de guerra: se extiende el clamor contra el Gobierno

**PROTESTAS/** Crece la lista de empleados públicos que se revuelven contra el Ejecutivo, que hoy se reúne con los letrados de Justicia para frenar una huelga que ha provocado la suspensión de 152.000 juicios.

J. Díaz, Madrid  
Protestas, huelgas, movilizaciones... Los empleados públicos han declarado la guerra al Gobierno de Pedro Sánchez, añadiendo un nuevo e incendiario frente a los muchos que ya tiene abiertos el Ejecutivo en pleno año electoral. El malestar de los funcionarios se extiende a lo largo y ancho de la Administración Pública, en áreas clave para la prestación de servicios, amenazando con agravar aún más el caos generado tras una década en la que se han encadenado tres crisis: la financiera, el Covid y ahora la guerra en Ucrania. Letrados de Justicia, trabajadores de la Seguridad Social, inspectores de Trabajo y de Hacienda, profesores, sanitarios, empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)... Todos en pie de guerra. Los empleados públicos pelean por alzas salariales pero también por el refuerzo de unas plantillas que consideran insuficientes ante una carga de trabajo que ha ido *in crescendo* en los últimos años.

Entre enero de 2019 y julio de 2022 la plantilla de la Administración General del Estado pasó de 197.576 efectivos a 227.492; esto es, un aumento de 29.916 personas (un 15,1% más), según los datos más recientes del boletín estadístico de Hacienda sobre el personal al servicio de las AAPP, refuerzo que los funcionarios ven insuficiente. Si se considera todo el sector público estatal (incluyendo al ejército, los cuerpos de seguridad del Estado, la Justicia y las empresas públicas), la plantilla total ascendió en 2022 a 515.449 trabajadores frente a los 507.830 de enero de 2019. En este contexto, los guñidos del Gobierno a los funcionarios, con el lanzamiento de una oferta de empleo público para 2023 de 27.509 plazas en la Administración del Estado (aunque el 58% será de promoción interna y no nuevas incorporaciones), y una subida salarial del 3,5%, que combinada con la reducción de su jornada de 37,5 a 35 horas semanales sin merma de sueldo, supondrá en realidad un incremento salarial de doble dígito, no han servido para apaciguar los ánimos entre los empleados públicos, que piden un alza salarial ligada al IPC. Al contrario,



Inspectores de Hacienda, durante una manifestación ante la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

## De las calles a los tribunales

El enfrentamiento entre Gobierno y empleados públicos ya no solo se dirime en las calles, mediante manifestaciones, protestas o huelgas, sino también en los tribunales, después de que el sindicato CSIF decidiera la semana pasada pasar de las palabras a los hechos y presentar una demanda judicial contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública "por el retraso injustificado del desarrollo del

teletrabajo en la Administración General del Estado". El sindicato con mayor implantación entre los empleados públicos respondió así al incumplimiento del acuerdo alcanzado en 2021. Precisamente, uno de los principales reproches al Ejecutivo es la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos con el colectivo, también muy molesto por la nueva Ley de Función Pública, que

contempla, por ejemplo, someter a los funcionarios de carrera a pruebas periódicas de desempeño que, en caso de suspensos reiterados, podrían ser apartados de sus puestos. En su día, CSIF rechazó de entrada esa posibilidad y CCOO anunció a finales de enero una veintena de movilizaciones por toda España contra el anteproyecto de ley porque "recorta derechos consolidados del personal público".

los tambores de guerra resuenan cada vez con más fuerza.

### Letrados de Justicia

El mayor conflicto a día de hoy, por sus graves consecuencias, es el que enfrenta a los letrados de Justicia con la cartera que dirige Pilar Llop. El colectivo reclama la adecuación de sus salarios al rango que ocupan en la Administración de Justicia (A1) tras haber asumido "más de 300 nuevas funciones" después de los cambios normativos de 2009. Los letrados exigen cobrar el 85% del sueldo que percibe un juez (la llamada *cláusula de enganche*), algo que el Gobierno rechaza de plano. Los letrados iniciaron el 24 de enero un paro indefi-

nido que hasta la fecha se ha saldado con 152.000 vistas y juicios suspendidos y el colapso cuasi total de la Justicia. Acusan a la ministra de Justicia de "incapacidad para resolver el conflicto" y llegaron a reclamar su "cese fulminante". Hoy, el Gobierno mantiene una nueva reunión con los letrados para intentar desactivar el paro. Sin embargo, su rechazo tajante a la *cláusula de enganche*, reiterado ayer, no parece acercar un acuerdo.

### Seguridad Social

En el polvorín en que se ha convertido la relación entre Gobierno y funcionarios CSIF anunció la semana pasada que se intensificarán las movilizaciones para que se refuerce la

plantilla de la Seguridad Social. El sindicato de funcionarios denuncia que en la última década el organismo que gestiona el pago de las pensiones y las afiliaciones, además de atender a 1,4 millones de empresas, ha visto mermada su plantilla en 10.000 efectivos y se ha revuelto contra la decisión del Gobierno de solventar el colapso que sufren sus oficinas obligando a los empleados a trabajar más horas sin compensación salarial. Todo ello en un contexto en el que se prevé que en cinco años se jubile el 28,5% de la plantilla.

### Inspectores de trabajo

En casa del herrero, cuchillo de palo. No deja de ser para-

dójico que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se presenta como adalid de la defensa de los derechos laborales, haya sufrido ya dos jornadas de huelga y una serie de movilizaciones de los inspectores de trabajo "para denunciar la caótica situación que sufre el organismo" por la falta de medios humanos y técnicos y el aumento de la carga de trabajo. El colectivo se queja de que la labor de inspeccionar 1,4 millones de empresas, 20 millones de afiliados y 10 millones de pensionistas recae en apenas una plantilla de 3.000 trabajadores, y denuncian que en 2022 se quedó sin ejecutar el 20% del presupuesto para la Inspección de Trabajo. El 22 de febrero ha-

**El malestar crece: letrados judiciales, inspectores de trabajo y Hacienda, médicos, profesores...**

brá un nuevo paro y no se descartará una huelga indefinida.

### Agencia Tributaria

Tampoco ocultan su malestar con el Gobierno los trabajadores e inspectores de la Agencia Tributaria. Según sus representantes sindicales el colectivo arrastra un déficit de plantilla de 5.000 empleados. En este organismo, vital para combatir el fraude fiscal, CSIF no esconde sus desavenencias con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que recientemente acusó de generar inseguridad jurídica con sus cambios de criterio sobre las deducciones por maternidad para madres que estuvieron en ERTE durante la crisis del Covid (primero se les reclamó la devolución de la ayuda y luego se dio marcha atrás), volantazo que se adoptó con efectos retroactivos y "sin avisar siquiera a los trabajadores de la Agencia Tributaria". A eso se añaden las tensiones entre los inspectores y los técnicos de Hacienda por la reforma de la promoción interna, que persigue simplificar los ascensos a una categoría profesional superior, a lo que se opone el cuerpo superior de los inspectores por considerar que supondrá una rebaja del nivel de preparación técnica exigida.

### SEPE

En el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), otro de los organismos con anemia de recursos humanos desde hace años, el agujero de plantilla se estima en 5.100 efectivos. Un organismo escasamente dotado que en los últimos años ha tenido que asumir la gestión de los ERTE, además de las prestaciones de paro.

### Profesores, médicos...

El listado de sectores que se sienten agraviados no acaba ahí. Las protestas y los paros de médicos y sanitarios se han extendido como una mancha de aceite por toda España (las competencias en Sanidad están transferidas a las comunidades autónomas), agravando aún más los problemas del sistema: déficit de atención primaria, interminables listas de espera, falta de profesionales... E incluso los profesores universitarios asociados se han rebelado contra el Gobierno por permanecer en un limbo de precariedad. Pese al frío invernal, el sector público ha provocado ya un arranque de año tórrido.